

Paz Total: Control Criminal de las Fronteras de Colombia *www.360geopolitica.org*

Las regiones fronterizas de Colombia se han convertido en epicentros de gobernanza criminal. En amplias extensiones del territorio, *la ausencia –o el retiro deliberado–* de una autoridad estatal efectiva ha permitido que grupos armados ilegales y organizaciones criminales transnacionales consoliden su poder, expandan operaciones y afiancen economías ilícitas. *El narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas y el tráfico de armas dominan hoy estas regiones, generando violencia sostenida, desplazamiento forzado y violaciones sistemáticas de derechos humanos, particularmente contra comunidades rurales e indígenas.*

Entre los actores más *poderosos* que operan en estas zonas se encuentran las disidencias de las FARC –incluido el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia–, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Clan del Golfo, el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua. Estos grupos operan junto a redes vinculadas a carteles mexicanos y otras organizaciones transnacionales, incluidas Hezbolá y Hamas. Estas estructuras criminales se han beneficiado de *protección* por parte de las administraciones de Maduro y Petro, que han negado públicamente su *existencia* o influencia.

Estos actores explotan la geografía estratégica de Colombia, utilizando corredores fronterizos para acceder al Caribe, el Pacífico, Centroamérica, Europa, África y países vecinos. Las dinámicas son particularmente visibles en Amazonas, Putumayo y Nariño, así como a lo largo de las fronteras con Venezuela, Ecuador, Perú y Brasil.

Ecuador-Perú: bajo disputa criminal

A lo largo de las fronteras con Ecuador y Perú, especialmente en las regiones amazónicas y del Putumayo, grupos disidentes de las FARC –incluidos el Estado Mayor Central y la Segunda Marquetalia– operan en coordinación con estructuras criminales híbridas como los Comandos de la Frontera. Al mismo tiempo, carteles mexicanos y otras redes transnacionales buscan consolidar rutas de narcotráfico y contrabando hacia puertos del Pacífico y Centroamérica.

Estos territorios son nodos clave para el cultivo de coca y el procesamiento de cocaína, y se han convertido en campos de batalla por el *control* territorial. La violencia resultante ha afectado directamente a las poblaciones locales mediante desplazamientos, intimidación y asesinatos selectivos.

El asesinato en 2023 del candidato presidencial ecuatoriano Fernando Villavicencio es particularmente relevante en este contexto. Su *modus operandi* guarda una estrecha similitud con el asesinato del senador y candidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay en 2025. En ambos casos, el crimen organizado y los grupos armados ilegales buscaron expandir su control territorial y su influencia política. *Los grupos armados colombianos intentan replicar en Ecuador y más allá el control que ya ejercen en Colombia.*

Sin embargo, la administración de Petro no ha querido contener su expansión transfronteriza. Esta realidad está en

gran medida ausente de la cobertura de los medios colombianos, que en cambio critican las *medidas de seguridad* tomadas por el Ecuador como los aranceles impuestos en respuesta al desbordamiento de la inseguridad proveniente de Colombia.

Venezuela: Gobernanza criminal binacional

A lo largo de la frontera con Venezuela –particularmente en Norte de Santander y Arauca– el ELN (“gente buena”, “mis hermanos”, según Petro), las disidencias de las FARC (incluida la Segunda Marquetalia de Iván Márquez), Hezbolá, Hamas y estructuras criminales respaldadas por el Estado venezolano como el Cartel de los Soles y el Tren de Aragua operan de manera coordinada y binacional.

Estos grupos controlan rutas de contrabando, corredores del narcotráfico y otras economías ilícitas, explotando los vacíos de seguridad *favorecidos* por ambos Estados mientras gozan de la protección de la dictadura venezolana y de la Paz Total de Petro. La competencia por las rutas de tráfico ha intensificado la violencia y la inseguridad, convirtiendo estas regiones en zonas de soberanía criminal *de facto*.

Brasil: Alianzas criminales en la Amazonía

En la frontera con Brasil, grupos disidentes de las FARC –incluidas la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central– han establecido alianzas operativas con las organizaciones criminales más poderosas de Brasil, en particular el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho. Estas alianzas facilitan el tráfico de cocaína y oro a través de sistemas fluviales, corredores selváticos y pistas aéreas clandestinas en lo profundo de la Amazonía. Control criminal y dominación social

A lo largo de las fronteras de Colombia, estos grupos *ejercen* control territorial mediante retenes, amenazas, extorsión y *regulación* social, reemplazando al Estado. Dominan el cultivo de coca, los laboratorios de procesamiento y las rutas de tráfico, a menudo en coordinación con carteles internacionales que explotan pasos informales para evadir a las autoridades. Para evitar la presión militar, estas organizaciones se fragmentan en unidades más pequeñas y móviles¹, utilizando la densa selva y la débil presencia institucional a su favor.

El costo humano es severo. Las disputas territoriales han provocado desplazamientos masivos, confinamiento forzado y amenazas persistentes contra comunidades indígenas y campesinas. Grupos como los Awá y numerosos pueblos amazónicos se han visto obligados al auto-confinamiento para sobrevivir en medio del fuego cruzado constante y la coerción.

Esta realidad refleja una profunda crisis de gobernanza. El Estado colombiano *ha fallado –o se ha negado–* a restablecer la autoridad y proteger a la población civil, mientras los grupos armados ilegales y las organizaciones criminales transnacionales consolidan su poder como *socios* de la llamada política de Paz Total del gobierno Petro.

“Paz Total”: orígenes y consecuencias

La política de *Paz Total* se gestó durante la campaña presidencial de Gustavo Petro, tras una reunión en la cárcel La

¹ Táctica utilizada por Petro con las comunidades indígenas para organizar manifestaciones en su favor como oposición y como gobernante.

Picota, en Bogotá, a la que asistieron su hermano y quien luego sería su primer Alto Comisionado para la Paz. En ese momento, el penal albergaba a alias “El Viejo”, señalado como coordinador del magnicidio del senador y candidato presidencial Miguel Uribe Turbay, presuntamente bajo órdenes de Iván Márquez, líder de la Segunda Marquetalia.

Este encuentro, conocido posteriormente como el *Acuerdo de la Cárcel La Picota*, habría ofrecido a grupos armados ilegales y redes del crimen organizado tres concesiones a cambio de apoyo: *continuidad de sus actividades ilícitas, control territorial de facto e inmunidad legal o política*.

Dicho acuerdo sentó las bases de la actual política de *Paz Total*, en la cual estos grupos son reconocidos como *interlocutores políticos*, mientras el Estado reduce significativamente la confrontación militar. Como resultado, estas organizaciones han *expandido su pie de fuerza, aumentado sus finanzas y su control territorial en Colombia, sino también en Venezuela, Brasil, Perú y Ecuador*.

En Panamá, desplazaron su enfoque hacia la trata de personas y el contrabando. La situación empeoró después de que, Pero introdujera el ingreso sin visa para varios países africanos, lo que detonó una expansión sin precedentes de las redes de tráfico humano. Solo el endurecimiento de las políticas fronterizas de Estados Unidos interrumpió significativamente este flujo, asestando un golpe a los socios de la Paz Total de Petro.

Las promesas de Petro: cumplidas...

En la práctica, las únicas promesas de campaña que Petro ha cumplido de manera efectiva son aquellas negociadas en la cárcel La Picota. Esta percepción está ampliamente extendida entre los colombianos. La mayoría de los demás compromisos funcionan como marketing político, amplificado internacionalmente, pero desconectado de la realidad sobre el terreno.

Desde septiembre de 2025, cuando Estados Unidos incrementó su presencia militar en el Caribe, el eje Maduro-Petro y sus socios de la Paz Total han buscado desviar la atención acelerando el tráfico a través de las otras fronteras de Colombia.

Según investigaciones de Caracol TV, Petro ha estado compartiendo inteligencia con grupos criminales de la Paz Total, lo que constituye evidencia de cooperación directa. Aunque varios militares fueron arrestados a finales de 2025 –presuntamente bajo presión estadounidense– por facilitar el tráfico en el Pacífico, no se tomaron acciones comparables a lo largo de las demás fronteras del país.

Ante la presión creciente, dos grandes incautaciones de cocaína en España fueron publicitadas a finales de 2025 y principios de 2026 como ejemplos de cooperación colombo-española. Sin embargo, colombianos y venezolanos –conscientes de las tácticas de la *era de Pablo Escobar*– reconocen estas incautaciones como gestos simbólicos destinados a aliviar la presión, mientras cargamentos mucho mayores continúan ingresando a Europa por otros puertos. *No obstante, estas operaciones resultaron políticamente convenientes tanto para Gustavo Petro como para Pedro Sánchez*.

Elecciones 2026: crimen y política convergen

Con las elecciones legislativas a solo dos meses y las presidenciales a cuatro meses, el presidente Gustavo Petro, su potencial candidato presidencial Iván Cepeda y su movimiento político, *Pacto Histórico*, continúan aferrados a la llamada política de “Paz Total”. En la práctica, esta estrategia ha significado *respaldarse* en grupos armados ilegales y redes de crimen organizado que hoy ejercen control sobre cerca del 70 % del territorio colombiano, incluidas amplias zonas de las regiones fronterizas, debilitando la autoridad del Estado y poniendo en entredicho la seguridad nacional.

En muchas regiones, instruyen abiertamente a las comunidades a votar por el movimiento y los candidatos de Petro, aprovechando su control territorial y el clima de intimidación que observadores electorales y organizaciones de la sociedad civil han documentado reiteradamente. Los colombianos perciben cada vez más una alianza político-financiera directa entre Petro, Iván Cepeda, su movimiento y las organizaciones criminales.

Mientras tanto, gran parte de la *comunidad internacional* limita su interlocución a ONGs, centros de pensamiento y movimientos sociales alineados con Petro y sus aliados para documentar la situación en Colombia, ignorando al resto de la sociedad civil y la creciente captura criminal del Estado colombiano.

Bogotá, Colombia. 25 de enero de 2026.